

deterioro en el acceso y el ejercicio efectivo
de los derechos económicos, sociales y culturales

Crisis, ajuste y políticas que perjudican a sectores medios y populares

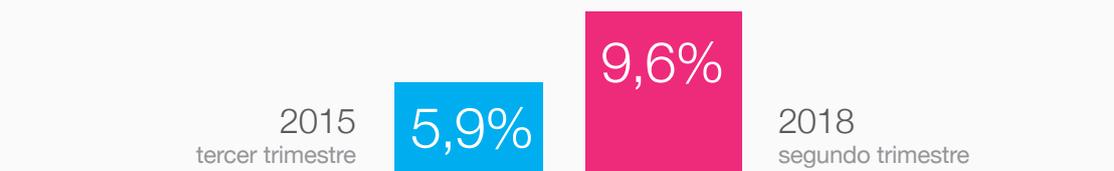
Los datos incluidos en este documento
surgen de siete informes remitidos al
Comité DESC de las Naciones Unidas
para su evaluación periódica del país.

El 27 y 28 de septiembre el Estado argentino rendirá cuentas ante la ONU sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El CELS remitió al Comité que realiza esta evaluación informes elaborados en conjunto con 55 actores, entre quienes se encuentran organizaciones sociales, sindicatos, centros de estudios, especialistas y organizaciones de derechos humanos. Al informe general, se sumaron seis sobre trabajo, salud, aborto, derechos culturales, la situación de las comunidades campesinas e indígenas y de las personas migrantes. Los resúmenes pueden leerse en cels.org.ar/informesdesc.

En la Argentina, las posibilidades reales de ejercer esos derechos se enfrentan con importantes limitaciones estructurales. A ese escenario se sumaron decisiones políticas recientes que perjudicaron a los sectores de ingresos medios y bajos. Ahora, en un contexto de crisis económica y mayor ajuste fiscal, el panorama se torna más preocupante aún.

desocupación

En la Argentina hay casi 2 millones de personas desocupadas, de las cuales el 39,4% lleva más de un año buscando trabajo.



Nivel de desocupación por género y edad (INDEC)

Segundo trimestre de 2018



caída del salario real

Se acelera la inflación y cae el salario real. Entre noviembre de 2015 y mayo de 2018, cayó un 5,7% para las y los trabajadores registrados del sector privado, y un 11,9% en el sector público.

Evolución del salario real promedio (CIFRA)



fuerce: CIFRA en base a Ministerio de Trabajo, Índice de salarios INDEC e IPC provincias-CIFRA.

● sector privado ● sector público

desigualdad

En el país crece la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos.

primer trimestre de 2018

aumento de la brecha

primer trimestre de 2017



aumento de deuda pública

La Argentina presenta desigualdades estructurales y las medidas políticas y económicas tomadas desde fines de 2015 agravaron la situación. Se produjo una transferencia de ingresos hacia los sectores privilegiados, una tendencia hacia la reprimarización del sistema productivo y un proceso acelerado de endeudamiento público.

Deuda pública total y deuda externa pública
en porcentaje del PBI (CIFRA)



fuelle: CIFRA en base al Ministerio de Hacienda, INDEC y BCRA.

● deuda pública total ● deuda externa pública

tarifazo

Entre 2015 y 2017 el gasto público se mantuvo en valores similares en relación con el PBI, pero el peso relativo de los intereses de deuda subió (0,9%) mientras que el de los subsidios a los servicios públicos bajó (0,8%). Este recorte a los subsidios incidió en fuertes aumentos en las tarifas de los servicios públicos desde 2016.

Aumento de tarifas



seguridad social

Se reformó de manera regresiva el sistema jubilatorio y de seguridad social, lo que llevó a una reducción del 10% al poder adquisitivo de los haberes. Se puso fin a un plan que permitía que las personas que no tenían los aportes contributivos suficientes pudieran jubilarse; el 75% de quienes accedieron al beneficio eran mujeres. Además, hubo un masivo recorte de pensiones no contributivas que beneficiaban a personas con discapacidad.

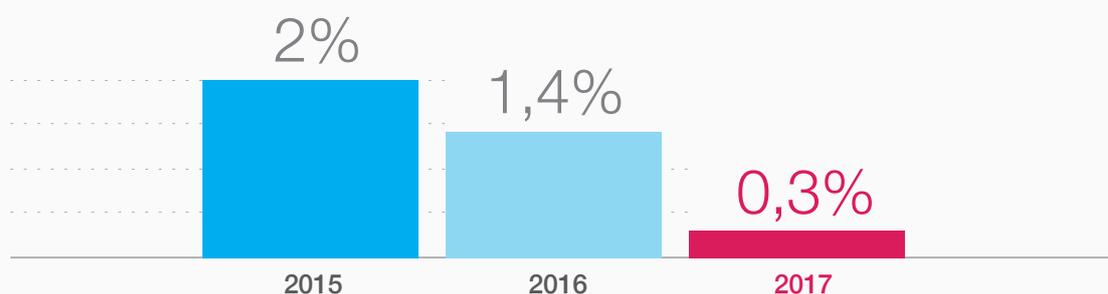
Beneficiarios de las pensiones por discapacidad



vivienda e infraestructura

En nuestro país, más del 10% de las viviendas no está conectado a la red de agua y más del 30% carece de servicios cloacales. No obstante, la inversión estatal en este tipo de infraestructura cayó en términos relativos.

Gasto público en obras de agua y alcantarillado, como porcentaje del PBI



ajuste “recargado”

El 3 de septiembre el gobierno anunció que profundizará los recortes en el gasto público para alcanzar el “déficit cero” en 2019. Como gesto de austeridad, reestructuró el gabinete y degradó al rango de secretarías ministerios que implementan políticas públicas de gran impacto en los derechos económicos, sociales y culturales.

Según las estimaciones oficiales, a fines de 2018 la inflación podría alcanzar el 42% y la actividad económica, sufrir una caída del 2,4%.

Este escenario -sumado al ajuste que se profundiza con el respaldo del FMI- afectará el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, y agravará la pobreza, con mayor impacto en las mujeres y en la población joven. Además, es posible prever mayores niveles de conflictividad social, que ya enfrenta respuestas estatales de represión, criminalización e intimidación.